

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE APELACIONES
REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA
PANEL VII

EL PUEBLO DE PUERTO
RICO

Recurrido

v.

ALFREDO RIVERA
SÁNCHEZ

Peticionario

KLCE201700929

Certiorari
procedente del
Tribunal de
Primera Instancia,
Sala de Ponce

Por: Art. 6 y 8 de
la Ley de Armas;
Solicitud de
Aplicación de la
Ley 246-2014

Caso Número:
J VI1995G0041 y
Otros

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2017.

El peticionario, Alfredo Rivera Sánchez, comparece por derecho propio ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce.

Por los fundamentos que exponremos a continuación, se desestima el presente recurso de *certiorari*.

I

Según se desprende del recurso de *certiorari* que nos ocupa, el peticionario se encuentra extinguiendo una sentencia de 99 años por la comisión de varios delitos. No detalla los delitos por los cuales fue sentenciado, ni la pena impuesta por cada uno de ellos.

En su escueto escrito, el peticionario alegó que había solicitado al foro primario la aplicación del principio de favorabilidad a su sentencia, en virtud de las enmiendas al Código

Penal de 2012 introducidas por la Ley 246-2014. Sin embargo, según señaló, el foro primario denegó su petición.

Inconforme con el dictamen, acudió ante este Foro mediante el recurso que nos ocupa solicitando la revocación de la determinación emitida por el foro primario. Aduce que conforme al artículo 67 del Código Penal de 2012, según enmendado, es acreedor de una reducción de un 25% a su condena. Por ello, solicita la modificación de su sentencia, al amparo del principio de favorabilidad, de modo que se le reduzca el término de las penas de reclusión que extingue actualmente. Cabe señalar que el peticionario no acompañó el recurso con la determinación apelada, ni con documento alguno relacionado con el asunto planteado.

Luego de examinar el expediente de autos, estamos en posición de disponer del presente asunto.

II

Sabido es que todo ciudadano que prosiga una causa en alzada está en la absoluta obligación de perfeccionar su recurso según los preceptos legales y reglamentarios que le sean aplicables, de manera que provea para el cabal ejercicio de nuestras funciones de revisión. Conforme reconoce el estado de derecho vigente, el alegato y los documentos que lo acompañan constituyen los instrumentos mediante los cuales el Tribunal de Apelaciones puede aquilatar y justipreciar los argumentos de quien acude a su auxilio. El incumplimiento de los requisitos exigidos imposibilita que el recurso se perfeccione a cabalidad, lo que redundaría en privar al tribunal intermedio de autoridad para atender el asunto que se le plantea.

De otra parte, el recurso de *certiorari* es uno de carácter extraordinario y discrecional. *Rivera Figueroa v. Joe's European Shop*, 183 DPR 580, 596 (2011). Su perfeccionamiento no solo está sujeto a su oportuna presentación, pues, en virtud de ciertas

disposiciones de naturaleza reglamentaria, dicha instancia también está atada a la fiel observancia de ciertos requisitos de forma.

En particular, la Regla 34(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E), dispone que es obligatorio incluir una copia de los siguientes documentos en el correspondiente apéndice: (1) la resolución u orden cuya revisión se solicita; (2) en los casos criminales, la denuncia y la acusación, si la hubiere; (3) toda moción o escrito de cualesquiera de las partes en los que se discuta expresamente lo planteado ante el foro de instancia; (4) toda moción o escrito de las partes que acredite la interrupción del término para presentar la solicitud de *certiorari* y la notificación de la resolución u orden disponiendo de las mismas; y (5) cualquier otro documento que forme parte del expediente original ante el Tribunal de Primera Instancia y propenda a esclarecer la controversia.

En defecto de que tales documentos no obren en autos, el recurso habrá de reputarse como inadecuado, ello por no haber sido perfeccionado a cabalidad. Lo anterior tiene como resultado el privarnos de autoridad para entender sobre el mismo.

III

En este caso, el peticionario presentó ante nos un escrito lacónico, en el cual expresa su inconformidad con la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, el peticionario no anejó a su recurso la determinación apelada, ni la copia de la moción presentada ante el foro recurrido. Tampoco presentó las sentencias dictadas en su contra. Tal omisión imposibilita nuestra intervención en la controversia, toda vez que no nos permite conocer los planteamientos presentados ante el foro primario, así como tampoco la pena por la cual solicita reducción.

Es meritorio resaltar que es norma conocida que como tribunal apelativo debemos abstenernos de resolver cuestiones que no fueron planteadas ante el Tribunal de Primera Instancia. *Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez*, 125 DPR 340, 351 (1990). Es importante, además, destacar que el Tribunal Supremo ha expresado que “el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica que incumplan con las reglas procesales”. *Febles v. Romar*, 159 DPR 714, 722 (2003).

Tal y como expusiéramos, la presentación incompleta del recurso incide en el pronto y correcto ejercicio de las funciones de revisión que nos fueron solicitadas, toda vez que desconocemos información necesaria para nuestra evaluación, entiéndase; la fecha en que el peticionario fue sentenciado y los planteamientos presentados a la atención del foro primario. Por otra parte, es menester resaltar que tampoco podemos auscultar nuestra jurisdicción, por desconocer la fecha del dictamen recurrido.

Dada la inobservancia del peticionario en cuanto a perfeccionar adecuadamente su recurso de conformidad con las exigencias reglamentarias pertinentes, resolvemos que estamos impedidos de acogerlo en sus méritos.

IV

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente recurso.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones